



MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Nº de solicitud: 001-061017

[REDACTED] ha presentado solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En su escrito solicita:

- Información de todas y cada una de las inspecciones llevadas a cabo durante el periodo 2009-2019 en las estaciones de telefonía móvil de todo el territorio nacional, incluyendo detalle de estas (ubicación exacta de las estaciones, número de medidas realizadas, valores obtenidos en las medidas, tecnología de la estación, operadores responsables, etc.), en formato reutilizable.

Fundamenta su petición en que se trata de cuestiones que tienen que ver con la salud y la seguridad de las personas tanto en espacios públicos como privados y donde viven y conviven el conjunto de la sociedad española.

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual,

RESUELVE

Conceder un acceso parcial a la información a que se refiere la solicitud presentada por [REDACTED] al amparo del artículo 14.1.h) de la ley de Transparencia 19/2013, de 9 de diciembre, por el que se establece que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales.



MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL



El artículo 10.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones establece que las Autoridades Nacionales de Reglamentación garantizarán la confidencialidad de la información suministrada que pueda afectar a la seguridad e integridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas o al secreto comercial o industrial.

Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia, según queda establecido en el artículo 2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, por lo que debe respetarse el principio de libertad comercial y la planificación de redes que realizan los operadores. En este sentido, los operadores compiten, entre otros instrumentos, con la calidad de servicio que presentan derivada directamente de la planificación de sus redes, circunstancia que se vería afectada si se hicieran públicos los detalles de todas las estaciones que cada operador tiene desplegadas.

En este sentido se desarrolla el artículo 8 del *Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero*, que regula el Registro Nacional de Frecuencias, en el que se encuentra toda la información, entre otras, relativa a las estaciones de telefonía móvil en todo el territorio nacional. Se trata de un registro de acceso restringido con el fin de garantizar la protección de los intereses comerciales y estratégicos de los titulares de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, así como también para garantizar la protección de datos personales.

Por ello, la única información pública disponible sobre estaciones de telefonía móvil es la que se puede obtener a través de la página web:

<https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/vcne.do>

que permite consultar a los ciudadanos, de forma individualizada, los niveles de exposición radioeléctrica medidos en zonas de permanencia habitual de personas próximas a las estaciones de telefonía móvil en servicio, y la que, de forma consolidada, se refleja en los informes anuales sobre la exposición a emisiones radioeléctricas, que publica esta Secretaría de Estado en la página:



MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL



<https://avancedigital.mineco.gob.es/inspeccion-telecomunicaciones/niveles-exposicion/Paginas/informes-anuales-emisiones-radioelectricas.aspx>

dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 96.8 del *Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico*.

EL DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Don Arturo Azcorra Saloña.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente en cada caso (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.